

IV CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA

Sevilla, 28 octubre - 01 noviembre 1992

“LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CÁRCEL”



MENSAJE

Los 518 asistentes al IV CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA, reunidos en la ciudad de Sevilla del 29 de octubre al 1 de noviembre de 1992 con el objetivo de conocer la problemática de los Derechos Humanos en los Centros Penitenciarios de España, en cuanto que dichos Derechos Humanos son un supremo bien jurídico reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestro ordenamiento constitucional:

CONSTATAMOS:

1. – La necesidad de que no se establezca distinción alguna entre los Derechos Humanos de los internos –salvo los limitados por la Sentencia–, y los Derechos Humanos de los demás ciudadanos.
2. – Que la gran mayoría de los internos han vivido ya con sus Derechos Humanos conculcados antes de su ingreso en prisión: salud, educación, trabajo, familia, vivienda, igualdad de oportunidades, etc.
3. – La excesiva duración de la situación preventiva; las situaciones de indefensión por una falta de asistencia efectiva del Letrado, durante el proceso y en el momento del juicio.
4. – Excesivo automatismo en la aplicación de la Ley Penal, deviniendo la prisión provisional como medida ordinaria, olvidando el carácter excepcional con que viene regulada en nuestro ordenamiento jurídico.
5. – Excesiva discrecionalidad por parte de la Autoridad Judicial en la aplicación de las medidas procesales.
6. – Divergentes valoraciones de los Tribunales respecto a las circunstancias de toxicomanías o alteraciones mentales del sujeto que han incidido en el proceso delictual, utilizándose con muy poca frecuencia el ingreso en Centros de Tratamiento como alternativa al ingreso en prisión.
7. – Carencias de Programas de Tratamiento de Toxicomanías en los Centros Penitenciarios.
8. – La necesidad de Programas de Información a los internos y sus familias, referentes a la situación procesal y penitenciaria en que se encuentran.
9. – Necesidad de que los vínculos familiares y sociales del interno no se rompan como consecuencia del ingreso en prisión (comunicaciones, visitas, traslados, ...).
10. – Pese a los esfuerzos realizados por la Administración penitenciaria, constatamos la necesidad de mejorar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene en algunos Centros Penitenciarios.
11. – Necesidad de una aplicación más restrictiva de situaciones de Régimen Especial, en consecuencia con el espíritu de nuestra Legislación Penitenciaria.
12. – Necesidad de prevenir situaciones de riesgo contra la integridad física y salud de internos y funcionarios (desmasificación, adecuación de la clasificación interior y penitenciaria, establecimiento de mecanismos que eviten la entrada de droga en los Centros, ...).
13. – Necesidad de una mayor y mejor comunicación entre internos y profesionales del Centro.
14. – Necesidad de que el principio de igualdad, recogido en nuestra Ley Orgánica General Penitenciaria, se aplique sin distinción a internos nacionales y extranjeros (permisos de salida, libertad condicional, trabajo, apoyo de Instituciones Exteriores, ...), al menos hasta que se extinga la condena.
15. – Constatamos que prima el Régimen sobre el Tratamiento, en contra de lo que dispone nuestra Legislación Penitenciaria.

16. – Existencia de grupos de presión de internos que conculcan o limitan los Derechos de otros internos.
17. – Carencia de Programas de Atención a internos seropositivos:
 - Concesión restrictiva, por parte de determinados Jueces de Vigilancia Penitenciaria, de la libertad condicional por la vía del Art. 60 del Reglamento Penitenciario.
 - Falta de recursos públicos y privados de acogida para enfermos terminales.
18. – Despreocupación de la sociedad, clase política e Instituciones sobre la problemática del mundo penitenciario y sobre las finalidades de la reinserción social.
19. – Manipulación de «La Alarma Social» por los Medios de Comunicación Social, contribuyendo a un progresivo aislamiento social del mundo penitenciario.
20. – Que, desde el momento de la excarcelación, muchos de los liberados encuentran las mismas –o mayores– dificultades para ejercer sus Derechos Fundamentales, que antes de su ingreso en prisión (antecedentes penales, rechazo social, dificultades laborales,...).

PEDIMOS:

I. – A LA SOCIEDAD, AL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES:

1. – Una Política coherente de prevención social que pasaría por crear en barrios marginales servicios sociales, hábitats dignos, infraestructuras, recursos laborales, formativos y de tratamiento.
2. – Inclusión en el Proyecto de Código Penal de Medidas Alternativas a la pena privativa de libertad, en consonancia con las legislaciones de nuestro entorno cultural, sobre todo en lo referente en la Libertad a Prueba («Probation»).
3. – Ampliación de los supuestos de aplicación de la Condena Condicional a penados reincidentes con problemática de toxicomanía, habilitándose el ingreso judicial (sin restricciones) en Centros de Tratamiento extra penitenciarios.
4. – Agilización de los procesos judiciales, dotando a los Órganos de Justicia con personal y medios materiales suficientes para el ejercicio de su función.
5. – Potenciar el Turno de Oficio con recursos y medios económicos suficientes y dignos.
6. – Efectivo control de las garantías procesales de los internos por los Órganos Judiciales.
7. – Aplicación de la medida de Prisión Provisional como última «ratio» en la aseguración de los fines del proceso.
8. – Exclusión en el Proyecto del Código Penal de la regulación de no aplicación de la redención de penas por el trabajo a determinados delitos, por ser esta exclusión contraria al Principio de Igualdad.
9. – Creación de una Ley del Jurado, en la que se dé una participación directa de los ciudadanos en la administración de Justicia.
10. – Creación de una Ley de Indulto Particular adecuada al momento social actual.
11. – Se tome en consideración por parte de los Órganos Judiciales de aquellos supuestos, en los que la firmeza de la Sentencia se produce con notable retraso en relación con la fecha de comisión del delito, habiéndose producido entretanto una normalización individual, familiar, laboral y social del penado.
12. – Creación de Programas de Tratamiento de Toxicomanías en los Centros Penitenciarios, con personal y medios adecuados.
13. – Creación en los Centros Penitenciarios de un servicio específico de información al servicio de los internos y de sus familiares.
14. – Que los destinos de los internos penados se realicen a aquellos Centros de Cumplimiento más próximos al lugar de residencia habitual.

15. – Que se lleve a término la política de construcción de nuevos Centros, que sustituyan a aquellos que se encuentran en condiciones deficitarias de habitabilidad, salubridad e higiene, dotándolos de locales adecuados para la práctica religiosa.
16. – Que se dé mayor control judicial en la aplicación del Régimen Especial.
17. – Adecuación de la clasificación interior a las características del interno, tipo de delito, duración de la condena, necesidad de tratamiento, edad,
18. – Implicar a las familias de internos toxicómanos en los Programas de Tratamiento de Toxicomanía aplicados a éstos.
19. – Adecuar mecanismos de control y supervisión, que sin atentar contra la dignidad y salud de la persona, impidan o dificulten la entrada de droga en los Centros Penitenciarios.
20. – Que no se valoren tan desproporcionadamente los hechos negativos aislados (evasiones, motines, violencias, ...) que acontecen en Centros Penitenciarios, en detrimento de los logros positivos en los Programas de Tratamiento.
21. – Que se valoren positivamente los permisos de salida de los internos, como mecanismos de preparación para la vida en libertad, pese a que se dan un pequeño porcentaje de fracasos.
22. – Que por razones humanitarias se dé una mayor implicación de la Administración Penitenciaria, de los Órganos Judiciales y Entidades Públicas y Privadas, en una atención más digna a los enfermos terminales.
22. – Que, extinguida la condena, no se tengan en cuenta los antecedentes penales, ni jurídica ni socialmente.

II. – A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:

1. – Una mayor objetividad e imparcialidad en el tratamiento de la información de los temas penitenciarios.

III. – A LA IGLESIA:

1. – Un compromiso de realizar su misión evangelizadora y humanizadora en los barrios marginales, a través de personas comprometidas y de servicios sociales normalizadores e integradores, en coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas.
2. – Una toma de postura clara y favorable a la inclusión en el nuevo Código Penal de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, a través de:
 - Documentos Episcopales
 - Medios de Comunicación Eclesiales
 - Información en las Parroquias y en los Movimientos Eclesiales
3. – Que propugne medidas alternativas a la pena privativa de libertad desde la efectividad, a través de la creación de Centros de Acogida, recursos formativos, creación de puestos de trabajo, recursos de tratamiento de toxicomanías, Centros Asistenciales,
4. – Formación del Voluntariado en la normativa penitenciaria y en las ciencias de la conducta humana.
5. – Que asuma desde el Evangelio el mundo de la prisión, prestando un servicio a los más pobres y marginados.
6. – Implicar al mundo contemplativo en la Pastoral Penitenciaria para que presten su apoyo a través de la oración.
7. – Que haga una invitación a las Diócesis, Parroquias, Comunidades Religiosas y Movimientos Apostólicos, a destinar sus recursos materiales y personales en la prevención de la delincuencia, en el tratamiento de las personas privadas de libertad, y en el proceso de inserción y reinserción social de los libertos.
8. – Promover la Pastoral Penitenciaria en las Parroquias como signo eficaz de comunión eclesial con sus miembros privados de libertad, atendiéndoles durante el período de prisión y tras su puesta en libertad.

IV. – AL SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA:

1. – Que elabore Programas para la Formación inicial y permanente del Voluntariado de Prisiones.
2. – Que asuma dentro de la Iglesia la responsabilidad de ser la voz de los presos.
3. – Que coordine a nivel nacional la acción del Voluntariado en la Pastoral Penitenciaria.
4. – Que elabore una guía de recursos sociales jurídicos y administrativos al servicio de la Pastoral Penitenciaria.
5. – Publique un Manual del Voluntario en el desempeño de su acción pastoral penitenciaria.
6. – Proporcione información al Voluntariado, Comunidades Cristianas y opinión pública sobre el desarrollo de la Pastoral Penitenciaria, a través de Medios de Comunicación Social Públicos, Privados y Eclesiales.
7. – Cree y promueva la celebración anual del DIA DEL PRESO.
8. – Defienda y promueva los Derechos Humanos de los presos.
9. – Elabore un Manual Divulgativo de los Derechos Humanos en la Cárcel.

NOS COMPROMETEMOS:

1. – Debemos visitar al preso al modo como Dios, a lo largo de la historia, ha visitado al hombre, al modo como Dios ha visitado a su pueblo: Dios ha salido al encuentro de la humanidad, de cada hombre, para amarle, ayudarle, defenderle, liberarle y salvarle.
2. – Nos comprometemos junto a todos los defensores de los Derechos Humanos, a defender los Derechos Humanos de los Presos.
3. – Nos comprometemos a ejercer en la cárcel una función profética, a ser voz de los que no tienen voz.
4. – Nos comprometemos a ser Voluntarios de opinión, a informar a la sociedad de manera objetiva sobre la realidad de la cárcel, para que conociéndola no la abandone y aporte soluciones eficaces.

Sevilla, 1 de noviembre de 1992